



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

Córdoba, diez de junio de dos mil veintidós.-MDB

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “FERROCONS S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO” (Expte. FCB 100004/2018) venidos a conocimiento del suscripto a los fines de resolver el planteo de desistimiento de la acción y de los que resulta:

1. Que, a fs. 2/28, comparece Sebastián Antonio Pérez en representación de la firma Ferrocons S.A. (conforme Acta de Asamblea de fecha 30 de junio de 2009 obrante a fs. 98/102), con el patrocinio letrado del Dr. Héctor E. Villegas Ninci, e interpone acción declarativa de certeza en los términos del art. 322 del C.P.C.C.N., en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), persiguiendo se despeje el estado de incertidumbre en relación a *“...qué es una PyME a los fines de la exclusión expresa dispuesta por el inciso a) del art. 2 del Decreto 814/2001, que hace que éstas sean encuadradas en el inciso b) con una alícuota del diecisiete por ciento -17%- en relación a las contribuciones patronales, y no en el inciso a) como pretende la AFIP con la alícuota del veintiún por ciento -21%-”* (fs. 4, 1^{er}. párrafo).

2. Señala que la empresa, en cumplimiento con el Régimen Nacional de la Seguridad Social (RNSS), realiza periódicamente contribuciones de la Seguridad Social en relación a sus empleados, aplicando la alícuota reducida del 17% –conforme la reducción en cuatro puntos porcentuales (4%) aplicable a los empleadores encuadrados en el sector “comercio”– en un todo de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 2, inciso b) del Decreto 814/01 en el entendimiento de que encuadra en la categoría de PyME conforme a la normativa de la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, que prevé un parámetro de monto de facturación anual que no debe ser superado para encuadrar en dicha categoría (Resolución 24/01 dictada por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME) y sus posteriores modificatorias).

Sin embargo, –sostiene– viene siendo una práctica habitual de la Afip (organismo recaudador de tales recursos) la insistencia en la determinación de diferencias a favor del ente fiscal sobre la base de considerar aplicable la alícuota del





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

21% con fundamento en que para encuadrar en la categoría PyME no debe superarse el máximo de facturación anual previsto en el año 2001, en la suma de \$ 48.000.000 fijada en el decreto 1009/01 y Resolución General de Afip 1095.

Esto último es expresamente rechazado por la empresa por considerarlo irrazonable, en tanto se mantiene congelado el tope desde el año 2001 sin que se contemple el proceso inflacionario y de devaluación de la moneda en nuestro país, de lo que se sigue que cada vez más empresas se verán obligadas a tributar con la alícuota agravada del 21%, pese a no haber mejorado, en términos reales, los montos de sus facturaciones anuales.

3. Relata que, en el año 2008, la Afip inició una acción vinculada a las referidas contribuciones por los períodos enero/2008 a abril/2010, determinando las diferencias como importe adeudado (con sanción de multa por supuesta “falsa declaración o adulteración de datos referentes a beneficiarios o al empleador que reduzca alícuotas de aportes y/o contribuciones”). Ante ello la firma interpuso Recurso de Apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, obteniendo sentencia favorable; la Afip planteo recurso extraordinario federal (el que fue denegado) y luego recurso de queja, el cual (con fecha 12/12/2017) fue declarado inadmisible por la CSJN.

Entretanto –sigue narrando– en el año 2015 la Afip inició análoga inspección, pero en relación a los períodos mayo/2010 a abril/2015 lo que derivó en una liquidación que fue objeto de una nueva impugnación administrativa y el posterior dictado de la resolución 3227/2017.

4. A continuación se ocupa de la procedencia de la acción declarativa de certeza.

Al respecto, señala que el estado de incertidumbre es manifiesto y palpable. Por un lado, la empresa liquida y paga, de manera periódica, las contribuciones a la Seguridad Social; por el otro, la Afip sigue insistiendo en su postura a pesar de la existencia de una sentencia firme que es contraria a tal interpretación. De tal manera, resulta prístino determinar cuál es la normativa aplicable a los efectos de la aplicación de la alícuota.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

De persistir el estado de incertidumbre, la empresa queda, hacia el futuro, expuesta a fiscalizaciones, determinaciones tributarias, intimaciones a presentar DDJJ rectificativas, intimaciones de pago, procesos administrativos con control judicial ante la C.F.S.S., previo pago de la deuda, intereses y multas.

Finalmente (en relación a lo que aquí se debate) ofrece prueba (documental e informativa) y hace reserva del caso federal.

5. A fs. 254/90 vlta. comparece la Dra. Eliana López Ardiles, en su carácter de apoderada de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el patrocinio letrado del Dr. Aldo Martín Molina.

En primer término, solicita que el Tribunal se avoque al tratamiento de dos cuestiones previas: la incompetencia y la existencia de litispendencia.

En relación a la incompetencia señala que el artículo 39 bis del decreto ley 1285/58 regula la Organización de la Justicia Nacional y Federal en todo el territorio nacional, disponiendo una vía específica para aquellos contribuyentes que pretendan cuestionar las resoluciones de la AFIP en materia de aportes y contribuciones, siendo dichas cuestiones competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Respecto a la excepción de litispendencia, denuncia que la actora interpuso recurso de apelación ante la C.F.S.S. impugnando la resolución 3227/2017 (DI CRSS). De tal suerte que entre la presente acción y dicho recurso se verifica triple identidad de sujeto, objeto y causa.

A continuación, procede a contestar la demanda. Al respecto (y en apretada síntesis) esgrime que no existe estado de incertidumbre, como así tampoco lesión actual; lo que ocurrió –alega– es que la actora simplemente encuadró incorrectamente a sus trabajadores en las disposiciones del art. 2 inc. b) del decreto 814/01 cuando correspondía la aplicación del inc. a) del mismo artículo.

Seguidamente ofrece prueba documental, esgrime gravedad institucional y hace reserva del caso federal.

6. A fs. 293/7vlta. la actora contesta el traslado corrido en relación a las excepciones de incompetencia y litispendencia.



#33047013#329311289#20220610125339485



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

En relación al planteo de incompetencia, distingue entre la competencia de la C.F.S.S. cuyo ámbito de conocimiento “*se limita a los recursos interpuestos contra resoluciones que dicte la Dirección General de Impositiva*” y la competencia de este Tribunal para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica.

Respecto a la litispendencia esgrime que en el planteo recursivo ante la C.F.S.S. se controvierte la determinación tributaria formulada por la Afip en relación a los períodos 05/2010 al 04/2015, con sus intereses; en tanto que en la presente acción se pretende la declaración de inaplicabilidad y/o la inconstitucionalidad del decreto 1009/2001 y de la resolución general 1095/01 en la medida que se interprete que es procedente el tope de \$ 48.000.000 dispuesto en la Resolución 24/01 dictada por la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa para los períodos que van del 05/2010 en adelante y hacia el futuro (es decir, por períodos que exceden aquella impugnación).

7. A fs. 315 se ordenó que pasen los autos a despacho para resolver las excepciones de previo y especial pronunciamiento planteadas por la demandada.

8. A fs. 316 comparece el apoderado de la firma Ferrocons S.A. y manifiesta que, con fecha 23/12/2019, se publicó la ley 27.541 (ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva) que viene a reconocer y convalidar en su artículo 19 –como asimismo en el decreto reglamentario 99/2019– el criterio interpretativo de su poderdante.

9. A fs. 320 la apoderada de la demanda procede a contestar la presentación que efectuara la accionante a fs. 316.

En primer lugar, manifiesta que antes de analizar la cuestión de fondo, se dé tratamiento a las excepciones de previo y especial pronunciamiento.

En segundo término, alega que conforme lo establece el artículo 87 de la ley 27.541 y lo dispuesto en los artículos 8 y 26 del decreto reglamentario 99/2019 las disposiciones a las que alude la actora surten efecto para las obligaciones de determinación e ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

de la Seguridad Social con vencimiento a partir del día 23/12/2019 (día de entrada en vigencia de la citada ley); es decir, para las devengadas a partir del período 12/2019 (con vencimiento en 01/2020). Por lo que aplicar una legislación de manera retroactiva sería atentar contra los principios constitucionales que nos rigen.

10. A fs. 324 se dispone, nuevamente, que pasen los presentes obrados a despacho para resolver.

11. A fs. 325 comparece el apoderado de la actora y plantea el desistimiento de la presente acción meramente declarativa de certeza. Aclara que desiste solo por razones procesales y se reserva el derecho a discutir eventualmente la materia sustancial.

12. A fs. 327/8 la Dra. López Ardiles contesta el traslado de planteo de desistimiento. Manifiesta de que en autos “...se encuentra en discusión la deuda determinada por AFIP en el marco de la orden de intervención N° 1345029 en concepto de decaimiento de beneficio reducción contribuciones patronales (art. 2 inc. b Decreto 814/2001) períodos 05/2010 a 04/2015...”.

Sostiene que el desistimiento debe ser de toda acción y derecho, así como también respecto de la eventual repetición; además, pide que el actor asuma el pago de las costas y gastos causídicos (incluidos los honorarios de los profesionales del Fisco que intervinieron en la presente acción declarativa). Todo con fundamento en el artículo 73 del C.P.C.C.N.

Finalmente, hace reserva del caso federal.

13. A fs. 231/4 el apoderado de la actora contesta el traslado corrido, respecto a la solicitud de la demandada de que el desistimiento sea integral (de toda acción y derecho, como asimismo de una eventual repetición) y que, además cargue con las costas y gastos causídicos.

En ese orden, se opone al pedido del pago de las costas del juicio en el entendimiento de que, en autos, es procedente la aplicación del segundo párrafo del artículo 73 del C.P.C.C.N.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

Al respecto señala que el desistimiento de la acción es consecuencia del dictado de la ley 27.541 (ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva), en la que se reconoció y convalidó expresamente el criterio interpretativo de su representada. De manera tal que, es el propio legislador el que vino a despejar la incertidumbre objeto de la presente acción.

Desde otro vértice, manifiesta que la Cámara Federal de la Seguridad Social Sala II, con fecha 30/04/2021, resolvió –a favor de su mandante–, en los autos “Ferrocons S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda”, el recurso interpuesto contra la Resolución n° 3227/17. Y toda vez que la referida Cámara oscilaba en su jurisprudencia, fue recién cuando tomó conocimiento de la postura de la Sala II a favor de la firma actora, es que desistió de la presente acción.

14. A fs. 235 obra el decreto de autos a los efectos de resolver el pedido de desistimiento.

Y CONSIDERANDO:

I- Que el planteo originario deducido por la parte actora consistía en la petición de despejar el estado de incertidumbre en relación a cuál es la normativa que define si la PyME “Ferrocons S.A.” debe tributar, en materia de contribuciones patronales de la seguridad social, una alícuota del diecisiete por ciento (17%) o una alícuota del veintiún por ciento (21%).

La actora sostiene que la normativa aplicable es la que dicta periódicamente la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME); en tanto que la demandada (Afip –organismo recaudador de los recursos de la seguridad social–) sostiene que debe aplicarse el decreto 1009/01 y Resolución General de Afip 1095/01.

Despejar tal incertidumbre, como se advierte, no tiene una finalidad meramente especulativa, sino que tiene consecuencias en la economía de la empresa; ello desde que establecer uno u otro criterio incide en el porcentaje de las contribuciones a la Seguridad Social que debe realizar la firma Ferrocons S.A. en relación a sus empleados. Asimismo, deja a la empresa, hacia el futuro, expuesta a fiscalizaciones, determinaciones tributarias, intimaciones a presentar DDJJ rectificativas, intimaciones





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

de pago, procesos administrativos con control judicial ante la C.F.S.S., previo pago de la deuda, intereses y multas.

II. Encontrándose los presentes obrados a despacho para resolver las excepciones de previo y especial pronunciamiento introducidas por la demandada, el apoderado del actor plantea el desistimiento de la acción (no del derecho) con fundamento en que el legislador, con el dictado de la ley 27.541, vino a despejar el estado de incertidumbre que había motivado la interposición de la demanda.

Corrido el traslado de ley a los efectos de que la Administración Federal de Ingresos Públicos preste aquiescencia al desistimiento, ésta no presta conformidad, pero tampoco se opone de manera categórica; en tanto que en relación a las costas y gastos causídicos del juicio sí se manifiesta expresamente: que los mismos sean asumidos por la parte actora.

III. Deben analizarse dos cuestiones, a saber: 1) si en autos procede el desistimiento y 2) cómo deben imponerse las costas.

IV. En relación a primera cuestión, es menester tener presente que el 2^{do}. párrafo del artículo 304 del C.P.C.C.N. exige –como requisito *sine qua non* para que proceda el desistimiento del proceso– la conformidad del demandado; y toda vez que, en autos, la A.F.I.P. no presta –de manera explícita– aquiescencia al pedido, pero tampoco se opone expresamente, sino que se limita a sostener que el mismo debe ser de toda acción y derecho (así como también respecto de la eventual repetición), pero –simultáneamente– solicita que las costas del juicio sean soportadas por la actora, resulta ineludible despejar este punto.

A tales efectos no debe perderse de vista que la acción está enderezada a solicitar que el Tribunal esclarezca cuál es la normativa que define si la PyME “Ferrocons S.A.” debe tributar, en materia de contribuciones patronales de la seguridad social, una alícuota del 17% o una alícuota del 21%.

De manera tal que, en estos obrados, no se solicitó una condena, tampoco la extinción, modificación o nacimiento de una relación jurídica, sino tan solo que se despeje un estado de incertidumbre respecto a una determinada normativa de la que las partes no son contestes.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

Y toda vez que –tal como lo sostiene el apoderado del actor–, el estado de incertidumbre fue despejado por el legislador con el dictado de la ley 27.541, la solicitud de desistimiento es procedente, aun cuando la demandada no haya prestado el consentimiento de manera expresa, pues aquí, como se dijo supra, no está en juego ningún derecho sustancial cuyo desistimiento cause estado e impida (a cualquiera de las partes) recurrir nuevamente a los tribunales de justicia en procura de su reconocimiento.

V. Despejada la primera de las cuestiones planteadas, corresponde ahora resolver si las costas deben ser a cargo de quien desiste o por su orden.

Cabe principiar señalando que el 2^{do.} párrafo de artículo 73 del C.P.C.C.N. establece que a las costas debe soportarlas quien desiste, salvo que el desistimiento se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia. En consecuencia, es bajo ese prisma que debe darse respuesta a la presente cuestión.

El dictado de la ley 27.541 tiene repercusión en el presente litigio, toda vez que el legislador, ciertamente, despeja el estado de incertidumbre al disponer expresamente que las alícuotas correspondientes a las contribuciones patronales con destino a los subsistemas de Seguridad Social, serán del 1)- veinte con cuarenta centésimos (20,40%) para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector "Servicios" o en el sector "Comercio", de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 220 del 12 de abril de 2019 y su modificatoria, o la que en el futuro la reemplace, siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los límites para la categorización como empresa mediana tramo 2, efectuado por el órgano de aplicación pertinente, con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660 y 23.661; y del 2)- dieciocho por ciento (18%) para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior.

De manera tal que el desistimiento del actor es una consecuencia lógica de haber visto satisfecha su pretensión “...*circunstancia (ésta) que configura una contingencia sobreviniente que elimina el interés en la prosecución del pleito debido a un hecho que no le es imputable...*”. (CNCom., Sala A. 18/3/02, LL, 2002-D-271)





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

Citado por Highton, Elena & Aréan, Beatriz (2004) *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*, ed. hammurabi, pág. 102.

En consecuencia, las costas se imponen por su orden.

VI. La regulación de honorarios de los letrados intervinientes se efectúa conforme las pautas arancelarias de la ley 27.423, vigente al momento de la realización de los trabajos profesionales. A tal fin y de conformidad al art. 25 y art. 16, en función de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del art. 21 de la ley 27.423, se tendrá en cuenta el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión del trabajo, como asimismo la naturaleza y complejidad del asunto; siguiendo también las pautas atento haberse cumplido únicamente con la primera etapa del proceso.

De acuerdo a tales parámetros, estimo justo regular los honorarios del Dr. Héctor E. Villegas Ninci, letrado patrocinante de la parte actora, en diez (10) UMAS equivalente a la suma de PESOS NOVENTA MIL DIEZ (\$ 90.010), según valor dispuesto en Acordada n° 12/2022 de la CSJN, de fecha 23/05/2022; no se regulan honorarios de los Dres. Eliana López Ardiles y Aldo Martín Molina, apoderada y letrado patrocinante de la parte demandada AFIP, por ser profesionales a sueldo de la accionada (art. 2 de la ley 27.423). Finalmente, se hace saber que dichos emolumentos deberán abonarse según el valor del UMA vigente al momento del pago (art. 51 de la Ley 27.423).

Por lo expuesto:

RESUELVO:

1. Tener por desistida la presente acción declarativa de certeza interpuesta con fecha 19 de diciembre de 2018.

2. Imponer las costas por su orden, en función de los argumentos vertidos en el considerando V.

3. Regular los honorarios del Dr. Héctor E. Villegas Ninci, letrado patrocinante de la parte actora, en diez (10) UMAS equivalente a la suma de PESOS NOVENTA MIL DIEZ (\$ 90.010), según valor dispuesto en Acordada N° 12/2022 de la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3

C.S.J.N.; y no regular honorarios a los Dres. Eliana López Ardiles y Aldo Martín Molina, apoderada y letrado patrocinante de la parte demandada (AFIP), por ser profesionales a sueldo de la accionada (art. 2 de la ley 27.423). Finalmente, se hace saber que dichos emolumentos deberán abonarse según el valor del UMA vigente al momento del pago (art. 51 de la Ley 27.423).

4. Protocolícese y hágase saber.

MIGUEL HUGO VACA NARVAJA
JUEZ FEDERAL



#33047013#329311289#20220610125339485